Presentación IADG en Lima, 24.02.16

'La importancia de la inversión privada para la calidad educativa'

Estoy aquí para presentar el Instituto Atlántico de Gobierno. Una escuela de formación avanzada que presido y que impulso personalmente. Que nace como iniciativa privada con vocación de servicio público. Una iniciativa que ya es —y que quiere serlo aún más- un centro de referencia internacional en la formación, en la investigación y en la divulgación en todas las disciplinas que ayudan al buen gobierno de las sociedades.

No hay novedad en el hecho de que yo me manifieste públicamente como defensor de la educación privada, como de las iniciativas privadas en general.

Creo que el trabajo del Estado no es sustituir a las personas en sus decisiones y en sus oportunidades, sino hacer posibles esas oportunidades para todos.

Respetando la libertad que debemos tener garantizada en las cuestiones esenciales que configuran nuestra personalidad y la de nuestros hijos.

Nuestra vocación y la de nuestros hijos.

Nuestro modo de vida y el de nuestros hijos, que no son una simple prolongación de nosotros mismos, pero sobre los que tenemos una responsabilidad que ejercer.

Insisto, no hay novedad en esto.

Pero quizás sí la haya si esta declaración la acompaño con otra menos habitual: creo que ser defensor de la iniciativa privada no significa ser detractor de las iniciativas desarrolladas por las instituciones oficiales. Al contrario.

He sido presidente del Gobierno de España durante ocho años en los que mi país logró éxitos nacionales e internacionales muy significativos. Y antes tuve también responsabilidades de gobierno regional.

No sólo creo en el Estado y en su capacidad para impulsar decisivamente a las sociedades cuando actúa bien, sino que he dedicado una parte muy importante de mi vida a hacer realidad esa convicción.

Dirigí la refundación del centro-derecha español;

Trabajé para hacer realidad un centro-derecha europeo que ha obtenido mayorías amplias y que ha marcado el camino de las principales instituciones de la Unión Europea;

E impulsé la organización internacional en ese mismo espacio político.

Hoy, en muchas de mis actividades, hablo sobre el buen gobierno y sobre los problemas del Estado en el ámbito atlántico.

No soy una de esas personas dedicadas a hablar mal del Estado y de los poderes públicos. Y no tengo problema alguno en decir que creo en las instituciones políticas como pieza clave de la civilización occidental. Es decir, de la civilización.

En ocasiones la protección de la iniciativa privada se resiente de una dificultad para acompañarla de un justo reconocimiento de la importancia del Estado. Una resistencia que daña la posición de quienes defendemos razonadamente la iniciativa privada, porque la hace parecer radical y poco reflexiva. Cosas que yo, desde luego, no soy.

Soy, por tanto, una persona que entiende bien la importancia del Estado y también, por supuesto, la importancia de la iniciativa privada. Que piensa que son activos complementarios, porque de los dos deben beneficiarse las sociedades.

Esto que creo de manera general, lo creo especialmente cuando se trata de la educación.

Por eso quisiera referirme a dos errores que con frecuencia se reproducen cuando se trata de definir un buen sistema educativo. Errores que cometemos también quienes somos partidarios de la iniciativa privada, o de la iniciativa social en materia educativa.

Quisiera referirme brevemente a ellos.

El primero es el error de aceptar el reparto del sistema educativo en lo que podemos llamar "áreas de influencia" en una Guerra Fría permanente entre lo Estatal y lo privado.

El segundo es el error de aceptar que lo Estatal actúe no como incentivo para mejorar la calidad de lo privado, sino como coartada para no hacerlo.

Si en muchos países la defensa de las iniciativas privadas sigue siendo objeto de controversia, se debe con frecuencia a que se establece mecánicamente una falsa polarización de los términos de la discusión.

Lo privado se opone a lo público como sinónimo de estatal, cuando lo público es mucho más que lo estatal. Y se produce una identificación automática entre lo privado y la derecha política; y lo público y la izquierda política. Y, a veces, incluso hay riesgo de sentirse cómodos en esa simplificación.

Sin embargo, la iniciativa privada no tiene por qué oponerse frontalmente a lo Estatal, porque una de las funciones de un Estado moderno es favorecer las condiciones en las que las iniciativas privadas pueden realizarse con mayor provecho para todos.

Este es el caso de cualquier sector productivo, que el Estado debe favorecer mediante marcos legislativos predecibles y sencillos que aseguren unas reglas del juego iguales para todos. Reglas transparentes e incentivadoras. Y también ha de ser así en la educación.

Por tanto, debemos desterrar ese tipo de pensamiento y de lenguaje disyuntivo y maniqueo que daña a las sociedades, porque las priva de algunos de sus mejores recursos.

La iniciativa privada no es iniciativa estatal, pero sí es iniciativa pública, porque está a disposición de cualquiera que desee hacer uso de ella. A la derecha o a la izquierda del arco político.

La educación es mucho más que los recursos materiales que se dedican a ella. Es también un modelo, un ideario, unos valores. Un compromiso. Es un sentido de autoridad, una idea del bien y de la verdad. Una vocación.

Esto no es monopolio de ningún grupo social ni de ninguna ideología, y debemos dejar muy claro que no lo es. Debemos dejar muy claro que la iniciativa privada en materia educativa no es un privilegio arrancado al Estado bajo presión unos cuantos, sino el ejercicio de un derecho que está al alcance de cualquiera que tenga un proyecto educativo que ofrecer.

Al actuar de este modo, no solo estaremos fijando correctamente los términos jurídicos de la iniciativa educativa privada y limpiándola de prejuicios que no le hacen ningún bien. También estaremos dejando claro que la educación patrocinada por el Estado no puede concebirse como el territorio propio de la izquierda ideológica. Ni menos aún como un mercado cautivo en el que dar continuidad a proyectos pedagógicos fracasados a condición de que se respeten nuestros proyectos educativos propios.

Dicho con claridad: debemos rechazar la división del sistema educativo en esferas de influencia ideológicas.

Y por ello -y me refiero ahora al segundo error que he mencionado- debemos exigir que la educación estatal se mantenga libre de propaganda y de ideología, que eduque bien y que lo haga con neutralidad en lo que debe ser neutral. Debemos evitar hacer de la educación privada un simple refugio frente al fracaso de lo Estatal cuando este tiene lugar, de manera que la existencia de un proyecto educativo con ideario propio no actúe como coartada para la falta de rigor.

Quienes promovemos iniciativas educativas privadas debemos exigir un buen sistema estatal con el que competir, no un mal sistema estatal que nos lo ponga fácil.

Y para librarnos de estos riesgos es necesario que las familias y los alumnos puedan elegir cada vez más y cada vez mejor el tipo de educación que desean recibir, independientemente de sus recursos económicos disponibles.

Precisamente por esto es necesario que la educación del Estado y las iniciativas privadas no se conciban como circuitos formativos cerrados y desconectados entre sí, sino como parte de un mismo sistema educativo que, en mutuo esfuerzo por formar mejores alumnos, impulsan al conjunto hacia arriba, y que compiten entre sí y con el exterior por atraer talento y recursos.

Hay muchas formas de combinar la obligación del Estado de proporcionar educación y asegurar la igualdad de oportunidades con el derecho de las familias a elegir modelo educativo. Y creo que resolver bien esta conjunción de obligaciones y derechos es una de las claves del desarrollo de las sociedades. Tanto en la educación obligatoria como en la educación superior.

No tiene sentido que yo proponga ahora un modelo ideal para nadie, porque cada país tiene sus propios problemas y sus circunstancias. Pero sí quiero insistir en que es decisivo que se actúe con la vista puesta en ese horizonte final.

Así es como concebimos el Instituto Atlántico de Gobierno, como un gran foro capaz de activar lo mejor de la educación superior pública y privada de España, de Europa y de América al servicio de un proyecto educativo verdaderamente ambicioso.

Un proyecto que ya ha merecido la confianza del mundo de la empresa, de la universidad y de la política de manera transversal y multinacional, como acredita la composición de su Consejo Académico y Social.

Se presentó en Madrid hace apenas un año, e inició su actividad docente hace seis meses. Y hoy, en un tiempo récord, es ya una referencia indispensable que exhibe una capacidad de convocatoria indiscutible y que acaba de iniciar las actividades de su campus on-line.

Creo que es una iniciativa necesaria y que se reconoce como tal. Y muchas instituciones se están sumando a ella con entusiasmo.

No responde ni pretende influir en las cosas del corto plazo. Es un proyecto meditado durante mucho tiempo, no una iniciativa improvisada. No tiene su origen en el clima social del momento, ni en España ni en ningún otro lugar.

No es un proyecto ni de propaganda ni de partido, aunque va a ocuparse de cuestiones que son del máximo interés para muchos partidos políticos, de tendencias diversas. Como son también del máximo interés para las empresas, para las instituciones, para los medios de comunicación y para el conjunto de las sociedades.

Con nosotros colaboran ya de forma muy activa personas que pueden situarse en el centroderecha o en el centro-izquierda. Personas cuya actividad profesional se sitúa en la universidad, en el periodismo, en la cultura, en la economía, en las finanzas, en la cooperación internacional y en los partidos.

Para nosotros lo importante es que sean personas capacitadas y comprometidas con nuestro proyecto formativo, que se basa en el rigor, en el esfuerzo y en las virtudes académicas clásicas: escuchar, leer, pensar, escribir y tomar parte en debates maduros sobre las cuestiones que marcan el progreso de las sociedades. Y hacerlo en perspectiva comparada y con visión atlántica y global.

El Instituto Atlántico de Gobierno quiere mostrarse deliberadamente inclusivo, acogedor con cualquiera que desee participar en sus actividades y que no manifieste una hostilidad abierta por nuestro ideario.

Como acabo de exponer, carece de sentido que yo pretenda aparentar una supuesta neutralidad ideológica de la que carezco. Tengo preferencias y convicciones arraigadas. Todos los que formamos parte del Instituto Atlántico las tenemos, cada uno las nuestras. Pero, entre ellas,

compartimos una esencial, y es que debemos trabajar a favor del marco común de nuestra convivencia. En España, en Europa y en América Latina.

Debemos reforzar los puntos de encuentro, los espacios de debate y de estudio de los problemas que compartimos, que sólo pueden tener soluciones si éstas obtienen el respaldo de amplias mayorías sociales y de amplias alianzas internacionales.

Cualquier materia política o social relevante es siempre demasiado compleja como para admitir aproximaciones simplistas, y eso lo sabemos especialmente bien quienes hemos ejercido responsabilidades de gobierno. Por eso tiene sentido estudiarlas. Y por eso la sociedad debe tener interés en que haya quien las estudie con garantías.

Vivimos un tiempo en que los efectos políticos y sociales de la revolución tecnológica empiezan a mostrarse en toda su profundidad en forma de fragmentación, desestructuración y pérdida de la institucionalidad en muchas sociedades. Por ello es necesario desarrollar proyectos cohesivos que contrarresten esa tendencia, que dificulta la gobernabilidad y la elaboración de las políticas.

Todo esto puede sintetizarse de un modo muy simple: el Instituto Atlántico de Gobierno no pretende ser un altavoz sino un foro. No pretende hacer ruido sino promover conversaciones pertinentes y ordenadas de las que hoy, como siempre, depende el bienestar y el progreso de las naciones.

En plena coherencia con las ideas que he expuesto hace unos minutos, no queremos aparecer ante la sociedad, porque no lo somos, como un espacio cerrado en el que una élite actúa en defensa de su propio interés. Al contrario, queremos aparecer, porque lo somos, como un centro abierto, permeable, donde se abordan los asuntos esenciales que afectan al interés común.

Tenemos ideario, no ideología. Un ideario que a mi juicio puede ser compartido por una amplia mayoría social, a izquierda o a derecha, preocupada por asegurar la continuidad y el fortalecimiento de marcos comunes de convivencia.

Atlántico significa para nosotros una demarcación geográfica, sin duda. Pero más que eso, significa un espacio de civilización. Que va más allá de los mapas y que incluye a cuantos estiman que la vida en sociedad debe asentarse en el Estado de derecho, el pluralismo político y social, la dignidad personal, la sociedad abierta, la libertad y la igualdad como base misma de la nación política moderna.

Atlántico significa, por tanto, una vocación de proximidad, de convivencia, entre muchos que comparten mucho y que deben ser conscientes de ello y saber aprovecharlo.

Por eso, como presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, estoy aquí hoy presentándolo personalmente. Por eso lo haré próximamente en otros países ante buenos amigos como los que hoy me acompañan. Y por eso estoy convencido de que tendremos éxito en este proyecto que nace con humildad pero con la máxima ambición. Hacer de nuestros programas, comenzando por el Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, una referencia internacional del máximo nivel.

Esperamos que sea de su interés.